

CAPÍTULO SEXTO LA DEFENSA DE LA AUTONOMÍA

Es azarosa la historia de la Universidad Nacional. Haré la síntesis con las certeras palabras del rector Ignacio Chávez: la vida de la Universidad “ha sido una lección permanente, reflejo fiel de la vida del país. Años de decadencia y de agonía, seguidos de un despertar pujante, capaz de todas las realizaciones”.⁴⁵⁷ Ya recordé algunos avatares, que trajeron consigo, al cabo de sucesivos capítulos conmovedores, las leyes orgánicas y los estatutos que rigieron la vida universitaria. La institución salió adelante, a pesar del torrente de adversidades que ha enfrentado. Obviamente, cada revuelta, cada conflicto, cada batalla tuvo un alto costo. Algunos aportaron, sin embargo, resultados plausibles para la nación y para la Universidad, porque también hubo batallas que preservaron la autonomía y aseguraron la libertad del pensamiento.

Las arremetidas injustas mellaron, en más o en menos, la existencia y el progreso de la Universidad, y por lo tanto afectaron, con mayor o menor hondura, el servicio que ésta presta al pueblo de México: sea para la formación de los jóvenes, sea para la defensa de las causas nacionales que la Universidad preserva a través de la docencia, la investigación y la difusión de la cultura, pero también —y conjuntamente con aquéllas— mediante el despliegue del espíritu observador y crítico, siempre animoso, que ha caracterizado a esta gran universidad mexicana y que sus adversarios abiertos o encubiertos han pugnado por suprimir, contener o doblegar, hasta hoy sin éxito.

Varias generaciones han hecho su parte en la preservación del afán vital universitario, que ha perdurado a lo largo del siglo XX y arribado al XXI, tras el desafortunado episodio crítico que se impuso a la Universidad en el tránsito entre ambos siglos.⁴⁵⁸ Los ignorantes de la historia, los advenedi-

⁴⁵⁷ “Palabras pronunciadas en el aniversario de la fundación...”, *op. cit.*, nota 14, t. I, p. 152.

⁴⁵⁸ El rector saliente entonces, Francisco Barnés de Castro, hizo notar en su carta de renuncia al cargo las acciones realizadas durante la etapa rectoral que concluía y “que

zos, los oportunistas y demagogos, que escrituran la existencia de la nación y de las instituciones a partir de su propio advenimiento y confieren a una y otras la breve dimensión que sugiere su visión estrecha, suelen caer en la ocurrencia de negar el trabajo cumplido previamente. No lo hacemos así los universitarios, que solemos reconocer la tarea desarrollada por quienes nos precedieron, como título moral para reclamar la de quienes nos sucedan. La crítica razonada no impide el honrado reconocimiento.

Sobre este último punto me parece oportuno reproducir expresiones de Julio Jiménez Rueda, escritas hace varias décadas, que conservan vigencia y frescura: “Es preciso hacer constar que la Universidad ha contado siempre con el trabajo heroico de la mayor parte de su profesorado, de sus empleados y de buena cantidad de los estudiantes que han concurrido a sus aulas, y con el empeño y la honestidad de la casi totalidad de las autoridades que han regido a la institución de 1910 a la fecha”. Esto, prosigue el distinguido cronista, “le ha permitido sortear las múltiples dificultades que se han planteado en el ejercicio de los diversos estatutos que la han regido”.

Termina Jiménez Rueda: “Rectores, directores, maestros, funcionarios y estudiantes, con mayor o menor fortuna han podido superar las situaciones de hecho y de derecho que han puesto en serio peligro al instituto de cultura más importante del país; gracias a la población universitaria que ha laborado con interés y con decoro, la Universidad ha salido airosa de las crisis que la pasión política o la pasión personal han planteado en el curso de su existencia cuatro veces centenaria”.⁴⁵⁹

En el proceso de la reforma de 1979-1980, el Estado asumió en el alto plano de la Constitución —porque ya lo tenía en otros peldaños normativos— el deber de respetar la autonomía universitaria. Constan las expre-

permitieron fortalecer la capacidad de planeación institucional a todos los niveles y propiciar que cada dependencia académica elaborase su propio plan de desarrollo; avanzar en la reforma del postgrado universitario; iniciar la discusión del modelo educativo de licenciatura; fortalecer la vinculación de la investigación con la docencia; reforzar los mecanismos de vinculación de la Universidad con la sociedad; avanzar en la discusión para la transformación de la Universidad en una red de *campus* con mayor autonomía académica y administrativa; cancelar o transformar estructuras administrativas y de apoyo que se habían quedado obsoletas; suspender la relación que por más de treinta años, se le impuso a la Universidad Nacional con las llamadas preparatorias populares y modificar el Reglamento General de Inscripciones eliminando el pase automático del bachillerato a la licenciatura y la permanencia indefinida en la institución”.

⁴⁵⁹ Jiménez Rueda, Julio, *op. cit.*, nota 4, p. 249.

siones, en este sentido, del suscriptor de la iniciativa de reforma⁴⁶⁰ y de los legisladores que votaron ésta.⁴⁶¹ La defensa de la autonomía compromete, pues, al Estado. Es obvio, puesto que se trata de asegurar el acceso a la educación pública superior —acceso que constituye un derecho fundamental de los ciudadanos—, derecho del individuo y deber del Estado. Evidentemente, no es el Estado el único obligado. Hay otros, desde las más diversas perspectivas: jurídica, política y moral. Y a la cabeza figuran los propios integrantes de la comunidad universitaria.⁴⁶²

Cuando se alude a la defensa de la autonomía, o más ampliamente, a la defensa de la Universidad Autónoma, se piensa en la insurgencia universitaria, puesta en pie de guerra, para amparar sus recintos, sus aspiraciones y sus decisiones. Es verdad que con movimientos de este género, combativos e inclusive violentos, se obtuvo, aseguró y desarrolló la autonomía. Y lo es que hubo actuaciones que militaron contra ella, sea por acción impropia o excesiva, sea por omisión y abandono. No es posible ignorar la agresión consumada contra la Universidad —desde todos los frentes: el externo y el interno—, con enorme menoscabo de su autonomía y compromiso para su destino, en la etapa rectoral del ilustre doctor Ignacio Chávez, ni lo es olvidar la firme defensa de la autonomía que en su hora debió encabezar el rector Barros Sierra, del que se conserva viva la memoria de una expresión dramática, al momento en que se izó a media asta la bandera nacional en la explanada de la Torre de la Rectoría: “Universitarios: Hoy es día de luto para la Universidad; la autonomía está amenazada gravemente”.⁴⁶³

⁴⁶⁰ En la exposición de motivos, el presidente López Portillo señaló: “Es compromiso permanente del Estado respetar irrestrictamente la autonomía”. *Derechos del pueblo...*, cit., nota 94, t. I, p. 419.

⁴⁶¹ Así, por ejemplo, en el discurso del senador Jorge Gabriel García Rojas: “al ser elevada a jerarquía constitucional, a la autonomía universitaria se le provee de una coraza protectora; significa que el Estado asume deberes para defender la autonomía universitaria; significa que el Estado se autolimita para no invadir las zonas universitarias; significa también que el Estado hará lo consecuente para tutelar esta nueva garantía constitucional”. *Derechos del pueblo...*, cit., nota 94, t. I, p. 528.

⁴⁶² En el debate sobre la reforma constitucional de 1980 se hizo ver el papel que en este sentido incumbe a los trabajadores universitarios. En concepto del diputado Juan Manuel Elizondo, “el sindicato ahora desborda los límites estrictamente laborales para convertirse en el defensor del tesoro que le cae en las manos a la universidad”: la autonomía. *Ibidem*, p. 508.

⁴⁶³ Véase la alocución de Barros Sierra en Silva Herzog, *op. cit.*, nota 43, p. 161. En esta breve obra figuran las reflexiones del profesor Silva Herzog sobre la historia de la

El 17 de noviembre de 1968, la Universidad —por conducto del rector y del Consejo—expuso públicamente, de nueva cuenta, su concepto de la autonomía dentro del orden jurídico nacional y frente al Estado, y ponderó el papel que aquélla cumple para la construcción y el florecimiento de la democracia: “La autonomía universitaria es parte del orden jurídico de la nación. Sin ella, la Universidad no puede cumplir sus funciones y se vulnera gravemente la democracia nacional. La defensa de la Universidad y de su autonomía es defensa de la democracia y nos compete a todos: estudiantes, profesores y autoridades, en cumplimiento de las leyes de la República”. La Universidad, que entiende las inquietudes e ideales de los jóvenes y también comprende las responsabilidades que corresponden al Estado, al mismo tiempo “demanda la comprensión” de éste: “sin Universidad libre y autónoma se reducen grandemente las posibilidades de un desarrollo personal independiente. Y demanda la comprensión de sus estudiantes: sin Universidad libre y autónoma se obstruye la democracia nacional”.⁴⁶⁴

En la crónica de estas andanzas no puede ignorarse la grave suspensión de actividades que en 1999, durante el rectorado de Francisco Barnés de Castro, hizo perder un año entero —y mucho más que ese tiempo, si se pondera el problema en todo su alcance, con sus múltiples repercusiones— a la Universidad, a la Nación y a los jóvenes de México, particularmente a quienes tienen en la Universidad Nacional su mayor, mejor o acaso única expectativa de progreso.⁴⁶⁵ No había verdadera razón que lo justificara.⁴⁶⁶

institución en la mayor parte del siglo XX. La obra entera ofrece datos y reflexiones valiosos, particularmente interesantes en la etapa que va de lo que Silva Herzog llama “una paz cuasi octaviana”, entre 1948 y 1966, al periodo de grave convulsión posterior a este último año. *Cfr.*, esp., pp. 98 y ss.

⁴⁶⁴ García Cantú, *op. cit.*, nota 210, p. 159.

⁴⁶⁵ En uno de sus extremos, el cierre de la Universidad en aquella época se reflejó en el movimiento de la demanda de ingreso a los niveles de bachillerato y licenciatura y, en menor medida, posgrado. Por lo que toca al bachillerato, la demanda varió como sigue: 1998-1999, 113, 218; 1999-2000, 114, 105; 2000-2001, 69, 409; 2001-2002, 84, 362; 2002-2003, 100, 610, y por lo que respecta a la licenciatura, se movió en los siguientes términos: 1998-1999, 143, 460; 1999-2000, 136, 266; 2000-2001, 92, 421; 2001-2002, 119, 439; 2002-2003, 149, 911. *Cfr.* http://www.planeacion.unam.mx/boletin/doctos_05/indicadores_5-1.pdf

⁴⁶⁶ El antiguo tema de las cuotas, abordado en una Propuesta de Reglamento General de Pagos, suscitó protestas y movilizaciones que finalmente paralizaron un amplio número de actividades universitarias. En la exposición de motivos del proyecto, la rectoría

Tampoco había conflicto que no se pudiera resolver con serenidad, cordura y buena fe. Las acciones de unos y las omisiones de otros⁴⁶⁷ impusieron a la Universidad un receso, con altísimo costo para el pueblo de México, no obstante la positiva voluntad manifestada por infinidad de universitarios, dispuestos a encontrar soluciones razonables, pactadas en el seno de la comunidad. En aquella dolorosa coyuntura se llamó la atención acerca de las características e implicaciones del problema: “Los universitarios y la sociedad entera —manifestó el rector Barnés de Castro— saben que está en riesgo la Universidad Nacional, una de las más grandes conquistas culturales y educativas del siglo XX mexicano, cuyos destinos están estrechamente ligados a los de la nación”.⁴⁶⁸ Al cabo de aquellos meses difíciles habría que reemprender el camino y adoptar los cambios que las circunstancias

advirtió: “La Universidad Nacional Autónoma de México, en tanto institución pública, garantizará que ningún alumno que tenga los requerimientos académicos que la Universidad exige para su ingreso quede fuera de ella por no poder pagar sus cuotas semestrales. Los alumnos de escasos recursos que lo soliciten bajo simple protesta de decir verdad, quedarán exentos del pago de dichas cuotas”. Éstas era diferibles y no retroactivas: los alumnos inscritos con anterioridad a la vigencia de las cuotas concluirían sus estudios bajo el sistema de pagos vigente al tiempo de su ingreso.

⁴⁶⁷ En su carta de renuncia a la rectoría, Barnés explicó que no habían tenido éxito “los únicos medios que los universitarios tenemos a nuestro alcance (para resolver el conflicto), que son los del diálogo y el uso de la razón, debido a la intransigencia de los grupos radicales que se han adueñado de la conducción del movimiento, a la injerencia de los grupos políticos ajenos a la vida universitaria y al clima de impunidad que a lo largo de estos meses ha prevalecido”. En el mismo sentido, Barnés de Castro había observado la lesión que impunidad y falta de respeto causan al “ethos universitario”. Cfr. “Plan de Desarrollo 1997-2000...”, *Gaceta UNAM*, 7 de mayo de 1998, p. 10. En su hora, el rector Sarukhán había señalado: “Uno de los elementos que más ha lesionado el ethos universitario es la falta de respeto e impunidad con que han actuado personas o grupos, frecuentemente ajenos a la comunidad de la UNAM, pues han usado la fuerza y la violencia como recurso para imponer sus demandas o formas de conducta en detrimento de los derechos y normas de los universitarios, hasta el punto de poner en riesgo su seguridad y la de nuestra institución”. “Informe anual 1977”, *Gaceta UNAM*, 16 de febrero de 1998, p. III.

⁴⁶⁸ Está “en riesgo —añadió— esta institución pública, patrimonio de todos los mexicanos y aliada del pueblo en la construcción de un país más próspero, más justo y más democrático. La Universidad Nacional no debe mantener cerradas sus puertas por más tiempo ni suspender sus labores. Ello entrañaría un quebranto para la nación; redundaría en merma del desarrollo de la ciencia, las humanidades, las artes y la tecnología; debilitaría la conciencia crítica de la sociedad”. “Abrir cauces y propiciar consensos para buscar una solución al conflicto, compromiso del rector”, *Gaceta UNAM*, 19 de agosto de 1999, p. 3.

solicitaran, en la inteligencia de que se mantendría con firmeza la autonomía universitaria.⁴⁶⁹

En ese tiempo se acreditó nuevamente la pertinencia de contar con una Junta de Gobierno, medio institucional para sortear los peligros y operar el relevo de la manera más conveniente para la Universidad. Al cabo de la clausura, en el rectorado de Juan Ramón de la Fuente fue necesario reconstruir la paz universitaria y reorganizar las fuerzas y los esfuerzos para proseguir, hacia arriba, la marcha interrumpida y evitar que el severo quebranto sufrido constituyera el principio de la decadencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, que sería, por razones evidentes, una convocatoria a la declinación de la educación pública superior, que muchos anhelan y alimentan. La reanimación de la vida universitaria, tras ese conflicto —calificado como el “más largo y costoso” en la historia de la Universidad— debía pasar por una “reforma amplia y profunda” que harían los propios universitarios “en ejercicio de la autonomía de la Universidad”.⁴⁷⁰

El Estado debe proteger a la Universidad —que no tiene, para su defensa, otra cosa que una inmensa autoridad moral— frente a las agresiones indebidas, que lesionan los intereses del pueblo con el pretexto de defenderlos. Hay cauce legal para hacerlo, sin el empleo de una violencia que también golpea a la Universidad y cuyas consecuencias hemos padecido en el pretérito. Tómese en cuenta la recomendación formulada desde 1977 por la ANUIES, dentro de la llamada Declaración de Guadalajara: el Estado “debe impedir la injerencia de elementos ajenos a las universidades, que pretendan frenar el desarrollo autónomo y democrático a juicio de las respectivas comunidades universitarias. En este sentido, además del apoyo económico, el Estado deberá garantizar que se mantenga el respeto a las universidades y a sus miembros, corresponsabilizándose con éstas para garantizar su estabilidad interna”.⁴⁷¹

⁴⁶⁹ Así, De la Fuente: “La solución del conflicto actual y la reforma subsecuente deben ser obra de los propios universitarios, en cabal ejercicio de la autonomía de la Universidad”. *Cuatro mensajes y dos entrevistas. El conflicto de 1999*, UNAM, 2000, pp. 26 y 34.

⁴⁷⁰ De la Fuente, “Mensaje de la propuesta para la Reforma Universitaria y la solución al conflicto”, de 6 de enero de 2000, y “Mensaje a la comunidad universitaria en el Antiguo Colegio de San Ildefonso”, 14 de diciembre de 1999, *cit.* Souto Mantecón, Arturo, “Al encuentro del siglo XXI: planeación y reforma en la UNAM”, en *Boletín Electrónico de Planeación y Evaluación*, http://www.planeacion.unam.mx/boletin/doctos_01/indicadores_1_1.pdf

⁴⁷¹ *Op. cit.*, nota 9, p. 5.

La defensa de la autonomía, que es defensa de la universidad pública autónoma y de lo que esta entraña, significa y favorece, llega a ser más que una acción de resistencia universitaria, a través de autoridades, profesores y estudiantes, contra las incursiones del poder externo. La acción defensora —insisto: de la autonomía, de la Universidad misma y de los intereses nacionales y populares— requiere la convergencia de fuerzas. En esta convergencia figuran el Estado, bajo el imperio de un deber constitucional, la Universidad y la sociedad a la que aquélla sirve.⁴⁷² En el caso de la Universidad, es preciso que la comunidad cultive y proteja lo que se ha denominado el “*ethos* o conjunto de valores universitarios”, que enlazan directamente con la preservación de la autonomía.⁴⁷³

Ahora bien, para sostener la autonomía en la circunstancia de ahora, y ciertamente en la previsible condición futura, hay que esclarecer cómo se vulnera la autonomía —desde diversos flancos: el Estado es uno, pero no el único; también los particulares y los grupos sociales—,⁴⁷⁴ quiénes son sus adversarios y cuáles los riesgos contemporáneos y las formas de mellar la Universidad Autónoma, con flagrantia o en sigilo. Esta es, hoy día, el baluarte de la educación pública superior: instrumento natural de la democracia con calificativos proclamada en el mismo artículo 3o que acoge a la institución autónoma. La arremetida contra la educación pública superior,

⁴⁷² “Defender a la Universidad en estos momentos, es tarea no exclusiva de los universitarios; es tarea de la sociedad entera. La Universidad pertenece a México, y a todos nos corresponde dar la batalla para que salga adelante”. Carpizo, “Exhortación a la defensa de la Universidad”, *Discursos...*, cit., nota 1, p. 599.

⁴⁷³ Cfr. sobre este concepto y su conexión con la autonomía, el Plan de Desarrollo 1997-2000, presentado por el rector Barnés de Castro a la comunidad universitaria, en <http://serpiente.dgsc.unam.mx/rectoria/htm.menu9798.html>. Hay que reiterar —señala De la Fuente— que “la Universidad es ante todo una institución académica y no un instituto político, y que la vida académica tiene sus reglas y sus valores. Si éstos se pierden o se trastocan la Universidad se acaba. Tales principios, junto con el derecho a autogobernarse y a responder responsablemente de sus recursos patrimoniales, conforman los elementos esenciales de la autonomía universitaria”. “Educar, más que transmitir información...”, *Gaceta UNAM*, 28 de septiembre de 2000, p. 5.

⁴⁷⁴ “Hay violación de la autonomía cuando el Estado, por cualquier medio, corta la independencia académica de la Universidad o impide que ella se rijan internamente, pero también existe cuando una corporación privada, un partido político, un grupo y, en general, cualquier entidad o fuerza externa interviene en la vida de la Universidad, sea alterándola, dificultando el cumplimiento de sus tareas o limitando de un modo o de otro las libertades que la sustentan”. “Declaración del Consejo Universitario de 1966”, *op. cit.*, nota 9, p. 5.

prohijada por los *nuevos vientos antiguos* que soplan sobre el mundo, y en todo caso sobre nuestra porción del mundo, lo es también contra esa versión de la democracia. Y pone en predicamento el ser y el quehacer de la Universidad,⁴⁷⁵ que marcha sobre el filo de la navaja y se enfrenta constantemente —aunque no siempre ostensiblemente— a la necesidad de resolver sobre aquéllos y establecer, por lo tanto, su misión contemporánea.

Han arreciado, con nuevos estilos y antigua deliberación, los asedios a la universidad pública:⁴⁷⁶ sea para ocuparla, sea para dispersarla o confinarla en la formación de cuadros subalternos que sirvan a designios cuya administración se halla muy lejos de ella. También se han presentado, en ocasiones, las acometidas ciegas de quienes no saben lo que hacen: ciegas y suicidas, porque de esta suerte entregan a los jóvenes en las manos que quieren eludir. Entre las ideologías y las potestades al servicio de éstas, persiste la lucha por la Universidad, que lo es por la nación. Nadie “puede asombrarse de que sobre (aquélla) ejerzan sus presiones, moderadas unas, brutales otras, fuerzas sociales o ideológicas que intentan imponerle criterios y hacerla torcer el rumbo, cuando no adueñarse de ella”. Los portadores de estas pretensiones saben o intuyen “que la Universidad es el ariete más formidable con que se puedan golpear, hasta hacerlas saltar en astillas, las puertas del futuro”.⁴⁷⁷

⁴⁷⁵ En concepto del rector Carpizo, “estamos en la Universidad, al filo de dos posibilidades antagónicas e irreconciliables: o la Universidad afirma su ser y los principios que la constituyen, o reniega de sí y de su historia, de su misión y compromiso con la nación”. “El ser y el quehacer...”, en *Discursos...*, *cit.*, nota 1, p. 695.

⁴⁷⁶ Armando Labra Manjarrez observa que la política imperante en materia de educación superior es una política de gobierno, no de Estado, “porque responde a directrices sexenales que en los hechos se desapegan de los compromisos estatales consagrados en nuestra Constitución Política. Es una política inercial que responde a la reproducción de acciones ceñidas a criterios estrictamente presupuestarios. Es una política adversa a la universidad pública”. Para sustentar su afirmación menciona algunos hechos; entre ellos: “Se ha estabilizado la matrícula de nivel superior, incluyendo la inscrita en normales y tecnológicos; el único sector que ha logrado crecer corresponde a los estudios de posgrado. En los 14 años recién transcurridos la matrícula en instituciones privadas aumentó de 18 a 32%, normalmente sin supervisión sobre la calidad de su personal docente, sus métodos de enseñanza, sus instalaciones educativas, su eficiencia terminal”. Además, sólo puede tener acceso a la educación superior el 22.5% de los jóvenes del grupo de edad entre 20 y 24 años. “El financiamiento de la universidad pública. La experiencia mexicana. UNAM: hacia una nueva política de financiamiento de la educación superior en México”, en http://www.planeacion.unam.mx/boletin/doctos_03/ensayo_3_1.pdf

⁴⁷⁷ Chávez, Ignacio, “Discurso pronunciado en la ceremonia de homenaje al presidente...”, *op. cit.*, nota 14, t. I, p. 250.

Afecta a la autonomía lo que vulnere, o lo pretenda, las prerrogativas y garantías que enuncia el artículo 3o. No se trata, por supuesto, sólo de un agravio político —que lo es en la medida en que la autonomía sea una decisión política del pueblo instalada en la Carta política de la República—, sino también de una violación jurídica, si contemplamos la Constitución como norma imperiosa, no apenas como programa sugerente. No es fácil que se contravenga de manera frontal e inmediata alguna prerrogativa de aquel catálogo, pero lo es que se mine o menoscabe. Habrá que analizar si esto suscita, con apoyo jurídico, el empleo de recursos jurisdiccionales. Un tratadista, al examinar las defensas de los derechos sociales, sostiene la posibilidad de hacerlo, en una doble dirección: acogida judicial del reclamo contra medidas “diametralmente opuestas” a la realización progresiva de las cláusulas de este carácter, por una parte; y bloqueo de las disposiciones regresivas, por la otra.⁴⁷⁸

No sólo el acto explícito, directo y ruidoso, sino también las circunstancias, más o menos ambiguas y silenciosas, pueden poner a la universidad pública y autónoma en estado de sitio, difícilmente para destruirla de plano —como quiso, privatizándola, alguna corriente que alcanzó a colarse en las antiguas normas de autonomía—, sí para disuadir s proyectos y abatir su competencia. Tal vez existe un cerco impuesto a las universidades públicas, porque lo hay sobre las ideas en las que aquellas se sustentan y los objetivos a los que sirven. Es, por supuesto, un antiguo empeño histórico, que siempre vuelve. Esta siembra cosecha, en fin de cuentas, decaencias profundas, divisiones radicales y exclusiones permanentes.

En un tiempo, el autonomismo fue militancia contra el Estado —o más suavemente, contra el gobierno en turno—, pero hoy debe constituir la

⁴⁷⁸ En cuanto a esta segunda hipótesis, se considera que “es judicialmente reclamable la neutralización de cualquier medida regresiva respecto de un cierto nivel o estándar alcanzado”. En algunos casos, la prohibición se halla expresamente prevista, como sucede en el supuesto de abolición progresiva de la pena de muerte, conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos; “pero de ninguna manera se requiere la expresa mención (prohibitiva) en las cláusulas programáticas, porque todas ellas son ‘progresivas’ y, por ende, la prohibición de regreso está implícita en razón de su esencia”. Zaffaroni, Eugenio Raúl, “La justicia como garante de los derechos humanos en México y América Central: la independencia del juez”, Varios autores, *La justicia como garante de los derechos humanos: la independencia del juez*, San José, Costa Rica, Unión Europea/Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD), 1996, p. 24.

fuerza que persuade al Estado, lo obligue, lo impela a militar con franqueza por la universidad pública autónoma. En este orden volvemos a la historia de los derechos fundamentales: antes se resolvieron en abstenciones del Estado; sólo más tarde fueron pretensiones de acción y tutela, promoción y desarrollo. Esto sucede hoy en el campo de las universidades públicas.

El Estado mengua. Los panegiristas del retraimiento sugieren pasar de la obesidad a la esbeltez. Sin embargo, el problema no se reduce a ciertos extremos “estéticos” o administrativos. Llega al corazón de cuestiones políticas que desembocan en puntos de equidad y justicia, e incluso comprometen la libertad misma.⁴⁷⁹ La marcha del Estado máximo al Estado mínimo no significa solamente recuperación de poderes sociales e iniciativas individuales, que sería su mejor producto. Puede significar, además, una renuncia a facultades que se traduzca, a la postre, en abandono de obligaciones, con la consecuente decadencia de derechos individuales y expectativas sociales. Los deberes del Estado se trasladan al mercado, cuyos horizontes éticos no son, por cierto, los más generosos.⁴⁸⁰ En consecuencia, no siempre es el Estado quien prescinde del poder para trasladarlo a los ciudadanos; a menudo son éstos quienes se ven privados del poder que les confería —al menos, era la expectativa practicable— la diligencia del Estado.

En estas circunstancias, habría que calcular con inmenso cuidado cualquier reforma a la regulación universitaria en los ordenamientos que exceden los poderes autónomos de la institución: Ley Orgánica y otras nor-

⁴⁷⁹ En este sentido, el interesante desarrollo que formula, para Estados Unidos y su Constitución, Cass R. Sunstein, quien a partir del pensamiento roosveltiano sobre una segunda declaración de derechos —derechos económicos y sociales—, hace notar que éstos permiten la efectividad de los derechos clásicos, concentrados en la proclamación de la libertad. *Cfr. The Second Bill of Rights*, Nueva York, Basic Books, 2004, esp. pp. 2 y 13.

⁴⁸⁰ Asedia, por otra parte, la tentación de retirar el apoyo a determinados sectores de la educación y la investigación universitaria. En esta circunstancias, “a los valores tradicionales que entraña la autonomía universitaria, la libertad de cátedra y de investigación, debemos añadir, de manera decidida, la defensa de las ciencias básicas, de las humanidades y de las ciencias sociales, más allá de cualquier coyuntura económica, más allá de las preferencias de quienes tengan, en un momento dado, la capacidad para definir prioridades, que muchas veces no corresponden a lo que verdaderamente debe ser prioritario”. *Palabras del rector Juan Ramón de la Fuente durante la entrega de reconocimientos a distinguidos universitarios, en el marco del programa “Formadores de las humanidades y las ciencias sociales en la UNAM”, 5 de septiembre de 2003 (UNAM-DGCS-024)*. En este sentido, *cfr.* también la *Intervención del rector de la UNAM... durante la discusión de proyecto de presupuesto para el año 2002*. 1o. de abril de 2002, UNAM-DGCS-188.

mas de este rango. Hay, de antes y de ahora, inquietudes reformadoras.⁴⁸¹ Son legítimas y pueden ser provechosas. Algunas pudieran resultar aconsejables para enfilar el rumbo en la nueva hora. Pero existe el riesgo, muy grave, de que se desmonte la autonomía o se mediatice o se condicione en las líneas de la ley secundaria que pretendiera reglamentar las disposiciones constitucionales. Una vez puesto en movimiento el proceso legislativo, que hasta ahora se ha contenido, difícilmente se podría acotar la reforma a ciertos puntos previstos y acordados. Pudieran surgir más entusiasmos y más tentaciones, que echen por la borda el patrimonio jurídico universitario, que ha sido, en este medio siglo, condición de vida universitaria, baluarte de la autonomía, resguardo de la libertad académica.

Desde luego, no hay normas congeladas, ni instituciones perfectas. De ahí la posibilidad de la reforma jurídica, para que la suerte de las generaciones sucesivas, es decir, el torrente de la vida, no quede en manos de una sola generación legisladora. Sin embargo, la ilusión reformadora pudiera llevar a destinos inciertos, y hasta sombríos, sobre todo cuando todavía no existe madurez democrática, pacto nacional en puntos fundamentales, serenas coincidencias en torno al interés superior de la nación, que desborda, por supuesto, el inmediato y menudo interés de caudillos, facciones y partidos.

Hace tiempo se planteó esta cuestión al rector Barros Sierra. Repuso: “Creo que después de un poco más de veinticinco años, la Ley Orgánica sigue siendo un instrumento eficaz para la vida universitaria. Evidentemente es perfectible como toda ley; sin embargo, siempre que se piense en modificarla hay que recordar que esto no depende de la voluntad de los universitarios, que como toda ley, debe ser discutida y aprobada por las Cámaras del Congreso; por consiguiente, hay siempre la duda de si cualquier iniciativa de reforma que mejorara este instrumento legal, no pudiera dar lugar a que prevalecieran puntos de vista distintos a los puramente universitarios. Entonces la ley resultará, en vez de mejorada, deteriorada en ese proceso de discusión y aprobación parlamentarios. Creo —concluyó— que puede mejorarse en algunos aspectos, pero si todavía sigue sien-

⁴⁸¹ Entre las recientes sugerencias de reforma figura la conducente a facilitar el acceso de la UNAM al financiamiento proveniente de la celebración de contratos con sectores externos. *Cfr.* Drucker Colín, “La libertad de investigación...”, *op. cit.* nota 8, p. 148.

do un instrumento mayormente eficaz, creo que vale la pena no correr el riesgo”.⁴⁸²

¿Conservan actualidad estos temores y estas razones de Barros Sierra? No pocos observan que las olas parlamentarias, tan encrespadas, pudieran no ser el mejor contexto para una reforma de la Ley Orgánica, salvo que concurren otros factores que permitan dar todos los pasos hacia adelante, y ninguno hacia atrás. Hay forma de procurarlo, aunque no es sencillo conseguirlo: siempre ha existido y persistirá el deseo de devorar la Universidad y ponerla al servicio de alguna causa parcial, no diré facciosa, que la conduciría por los caminos de la aventura y desvirtuaría su naturaleza.

Silva Herzog, que cita el parecer de Barros Sierra, entiende la opinión de éste, pero sugiere explorar la posibilidad de que el proyecto de reforma, en su caso, provenga del Consejo Universitario y llegue al Ejecutivo para que éste solicite y ejerza las facultades legislativas extraordinarias que le conceda el Congreso. De tal suerte se encauzaría por un camino seguro la reforma: de la Universidad, sin interferencias. Así se utilizarían, combinadas, la vía que empleó el presidente de la República cuando expidió la Ley de 1929, por una parte, y la que utilizó la Universidad para allegar al Ejecutivo el proyecto de 1944, por la otra.

En cuanto a la participación de la comunidad universitaria, y sin perder de vista los problemas que entraña la búsqueda de posiciones unificadas, que concilien las diferencias y construyan coincidencias, quiero invocar lo que dije cuando me referí a la Ley de 1929. Es necesario reconocer en este caso la relevancia que tiene acoger, a la hora de legislar, la opinión de los universitarios. No digo que sea la única opinión relevante. Afirmo que es indispensable y que será decisiva. En esta hipótesis conviene admitir, en toda su intensidad, la idea del derecho social que deposita en manos de los integrantes de cierta comunidad de vida e interés las decisiones que gobernarán su existencia y su desarrollo. Por supuesto, el Poder Legislativo formal cuidará de que las propuestas no vulneren el interés nacional, sino lo sirvan con eficacia.

Reitero —lo transcribo— que esa vena social puede correr, y debe correr en supuestos como el que ahora me ocupa, desde un momento anterior a la consumación legislativa. En aquéllos se halla en juego un conjunto de libertades fundamentales, un haz de derechos individuales que reclaman

⁴⁸² García Cantú, *op. cit.*, nota 210, pp. 36 y 37.

determinada garantía social, todo lo cual justifica holgadamente, en mi concepto, la intervención de los destinatarios de las normas —o de algunos de ellos, porque destinatarios, en estos casos, son todos los integrantes de la sociedad— en la formulación de esas disposiciones. Son, en la especie, actores calificados que trabajan en virtud y para el servicio de una demanda social y de un interés colectivo de primera importancia.

Al cabo de las reflexiones y las acciones, de la revisión del pasado y la anticipación del futuro, de las exigencias y las esperanzas, habrá necesidad de poner al día nuestro concepto de autonomía y proveer a las nuevas generaciones con los elementos —ante todo, la transmisión de aquélla, sin menoscabo, a las manos que deban sostenerla— para avanzar en este empeño. Esto obligará a descifrar constantemente —en el fondo del caleidoscopio que reacomoda las piezas y produce, con los mismos componentes, nuevas estampas— el sentido y el alcance de la autonomía universitaria frente a los espejos en que debe mirarse. Habrá, pues, que reflexionar sobre lo que ella significa, ofrece y demanda en sus múltiples proyecciones: derecho, libertad, responsabilidad, dignidad, majestad, garantía, necesidad, pluralidad, convicción, tolerancia, compromiso, fortaleza.